

Crónica del mes

Julio-agosto

El bimestre de julio-agosto constituyó un período de renovado debate al más alto nivel sobre el proceso de negociación salvadoreño. A ello contribuyeron las reuniones cumbres de San Salvador y Guadalajara; la invitación enviada a Cristiani y a la comandancia general del FMLN por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, para reunirse en Nueva York a mediados de septiembre, y la inminente reanudación del debate sobre la ayuda militar al ejército salvadoreño, en el seno del Congreso norteamericano. No obstante, en términos de reuniones concretas de diálogo entre el gobierno y el FMLN, el período arrojó pobres frutos. El único encuentro de este tipo tuvo lugar, otra vez en México, entre el 9 y 11 de julio, con el propósito de avanzar en lo que el mediador de la ONU, Alvaro de Soto, calificó como "trabajo preparatorio necesario principalmente respecto a los temas de la Fuerza Armada".

Al inicio de dicha ronda, De Soto puntualizó con toda claridad que no era anticipable que de ella surgiera un acuerdo sobre el cese del fuego. Indicó que, aunque "en los temas del cese del fuego hemos hecho virtualmente todo lo posible en términos de trabajos preparatorios técnicos", se precisan "decisiones políticas". Sobre el mismo punto, el miembro de la delegación negociadora rebelde, Salvador Samayoa, comentó que el FMLN estaba de acuerdo en no tocar el tema del cese del fuego, porque "consideramos que mientras no se avance en el tema de la Fuerza Armada, no tie-

ne sentido seguir viendo otros puntos".

La ronda concluyó la noche del jueves 11. Según Samayoa, en ella se profundizó en el análisis del problema de la policía nacional civil e incluso se alcanzaron algunos acuerdos, pero "en congeladora", los cuales no serían dados a conocer a la opinión pública porque estaban sujetos a revisión en función de otros acuerdos que pudieran tomarse ulteriormente.

Por su parte, el comandante Leonel González confirmó que hubo avances en materia de Fuerza Armada, pero no se llegó a ningún acuerdo, porque se trataba más bien de una reunión preparatoria y de trabajo. Asimismo, indicó que el FMLN planteó el problema del inicio de su actividad política en el marco del cese del fuego, así como el tema del ordenamiento socio-económico. La delegación gubernamental se habría comprometido a estudiar las consideraciones presentadas. En conjunto, el comandante guerrillero opinó que el proceso negociador "va avanzando aunque no haya arrojado acuerdos concretos, pero sí avances en temas fundamentales". El mediador De Soto se limitó a comentar que hubo "avances específicos, pero nada espectacular. No hay retroceso, los avances son importantes"; y reiteró que "se trabaja en un esquema de paquete difícil de desglosar".

El 12 de julio, un día después de finalizar la ronda, Leonel González anunció, en la capital mexicana, que el FMLN suspendería sus acciones

militares entre el 15 y 17 de julio "como gesto de voluntad política" para facilitar un clima propicio a la décima cumbre de mandatarios centroamericanos que tendría lugar en esas fechas en San Salvador. El presidente Cristiani desestimó el ofrecimiento rebelde como "una situación un poco propagandística".

La cumbre de los presidentes centroamericanos, realizada entre el 15 y 17 de julio, tuvo la virtud de mantener la atención sobre el tema de las negociaciones, pero al precio de polarizar los ánimos, gracias a la condena unilateral del FMLN con que los mandatarios de la región clausuraron el evento. Muy distinto fue, en cambio, el clima prevaleciente en la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, celebrada en Guadalajara, entre el 18 y 19 de julio, la cual fue ocasión para un intenso debate, paralelo a la agenda protocolar del encuentro, entre las partes comprometidas en el proceso de negociación salvadoreño.

Por ejemplo, la noche del 17 de julio, tras su llegada a Guadalajara, el presidente Cristiani se reunió con el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar; y al día siguiente, con el anfitrión de la cumbre, Carlos Salinas de Gortari. Pérez de Cuéllar, por su parte, se reunió también con los comandantes Joaquín Villalobos y Shafick Handal y, en la mañana del día 18, con los mandatarios del "Grupo de amigos".

Al propio tiempo, a nivel interno, el FMLN siguió empeñado en la tarea de consolidar la infraestructura necesaria para su plena incorporación a la lucha política no armada. En una entrevista difundida el 29 de julio por *Excelsior*, el comandante Shafick Handal anunció que "vamos a solicitar el registro del FMLN como partido". "Aprovecharemos el momento histórico del empate en la guerra que se está librando en El Salvador... se trata de ocupar los espacios políticos que hemos ganado, quiera o no el régimen, como un aporte a la paz, pero jamás nos desarmaremos unilateralmente", subrayó. Más aún, de acuerdo a Handal, el FMLN tendría la intención de participar en las elecciones presidenciales de 1994, aunque no se firme la paz. En relación a las dificultades que enfrentaba el proceso de negociación, Handal señaló que "los sectores más extremos de la derecha

creían que las negociaciones eran un esfuerzo nada más de imagen del gobierno, pero cuando ven ahora que va en serio y se toman acuerdos importantes con el FMLN, como las reformas a la Constitución, abandonan su actitud y se vuelven opositores a la paz". Finalmente, opinó que "la clave de la continuidad o no del conflicto bélico es el financiamiento de Estados Unidos al ejército salvadoreño".

Sin embargo, no obstante los contactos habidos en Guadalajara, y la disponibilidad del FMLN para negociar su incorporación a la lucha política legal, el gobierno siguió dándole largas a las negociaciones. Como pretexto explícito de tal actitud, ARENA adujo el secuestro del cafetalero y directivo del sector agropecuario del partido, Gregorio Zelaya, plagiado por el FMLN en Usulután, a mediados de julio. Asimismo, tampoco pudo disimular su malestar por el secuestro del empresario Guillermo Sol Bang, cofundador de ARENA y miembro de su Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), con el cargo de tesorero, plagiado por desconocidos, al mediodía del 18 de julio.

En una conferencia de prensa, ofrecida el 19 de julio, para denunciar el hecho, el presidente de ARENA y alcalde de San Salvador, Armando Calderón Sol, calificó a Sol Bang como "uno de nuestros máximos dirigentes, un hombre que figura desde la fundación del partido y que es respetado y querido por todos en el país". De acuerdo a testigos del hecho, el empresario fue interceptado a la salida de sus oficinas, ubicadas en la colonia Flor Blanca, por tres hombres fuertemente armados con fusiles *M-16* y *G-3*, quienes lo introdujeron en un vehículo rojo con vidrios polarizados.

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa, Calderón Sol confirmó que el mayor Roberto D'Aubuisson, presidente vitalicio del partido, sufría de un "tumor maligno" en la lengua y el cuello, y que, aunque estaba recibiendo "un tratamiento de radioterapia" en el hospital metodista de Houston, Texas, "el pueblo salvadoreño está claro: es una enfermedad mortal". Sobre el mismo tema, un reportaje de Kenneth Freed ("Salvadoran Rightist Terminally Ill With Cancer") publicado en *Los Angeles Times*, el 20 de julio, señalaba que, según una fuente diplomática que había teni-

do acceso a la condición médica del ex mayor, el deceso de éste podría ocurrir en un par de meses. Otras fuentes citadas por Freed señalaban que, en el último año y medio, D'Aubuisson se habría constituido en una pieza clave para refrenar el descontento de la ultraderecha de ARENA contra las negociaciones del gobierno con el FMLN. Incluso, según dichas fuentes, D'Aubuisson habría reprendido, en presencia de otros dirigentes de ARENA, al vicepresidente Francisco Merino y al presidente de la CEL, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, por la campaña de amenazas que éstos habrían desatado recientemente, junto al ex comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo, en contra del personal de la ONU y de los miembros de ARENA, que apoyaban los esfuerzos de diálogo de Cristiani con el FMLN.

El FMLN no se responsabilizó de inmediato del secuestro de Zelaya. Más aún, voceros insurgentes desmintieron en un primer momento al obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, cuando éste afirmó tener informes de que el FMLN tenía en su poder a Zelaya. Posteriormente, en un comunicado, difundido el 6 de agosto, el FMLN aceptó la versión del prelado, a la vez que justificaba el hecho, aduciendo que en el "estado de guerra que vive el país tiene derecho a realizar acciones para el cobro de impuestos de guerra, línea de acción que comenzó hace veinte años junto al nacimiento de la guerra". Finalmente, el 23 de agosto, el FMLN liberó a Zelaya, quien fue entregado en Jucuapa (Usulután) a uno de sus hermanos, en presencia de monseñor Rosa Chávez.

La suerte corrida por Sol Bang fue distinta. En un inicio, el propio Calderón Sol puntualizó que "no quiero involucrar a ningún grupo específico porque no tenemos datos y hechos concretos y sería irresponsable de nuestra parte hacer este tipo de imputaciones". No obstante, paulatinamente, la dirigencia de ARENA empezó a hacer acusaciones cada vez más explícitas sobre la responsabilidad del FMLN en el plagio.

Esta situación afectó sensiblemente la atmósfera de la negociación, al punto que una presunta nueva ronda de pláticas que debería haber tenido lugar el 12 de agosto, según versiones extraofi-

ciales previas del FMLN, fue suspendida. Posteriormente, el 14 de agosto, en declaraciones vertidas en México, Salvador Samayoa, miembro de la comisión político diplomática del FMLN, explicó que "es una posición del gobierno salvadoreño la de no querer que haya reuniones directas, y atendiendo a esa petición del presidente Cristiani es que el mediador, Dr. Alvaro de Soto, dejó sin programar la próxima ronda de negociaciones". Por otra parte, Samayoa comentó que las negociaciones se encontraban en una etapa "difícil, decisiva", aunque no estancadas, e incluso habría "avances acumulados" sobre varios puntos de la agenda de la negociación. La noche de ese mismo día, por su parte, el presidente Cristiani informó que el mediador de la ONU mantenía reuniones con ambas partes para preparar una nueva ronda de conversaciones.

En un nuevo esfuerzo para agilizar el proceso, el FMLN presentó una propuesta para modificar el esquema de negociación acordado en Caracas, en mayo de 1990. El nuevo esquema, según lo esbozó Salvador Samayoa el 14 agosto, trataría de "comprimir las dos fases de la negociación en una sola, de manera que pudiéramos llegar a un alto el fuego definitivo en el más breve plazo posible". Samayoa añadió que el FMLN estaba "en consultas con distintos sectores buscando su opinión y saber si les parece bien" la propuesta. En ese marco, el FMLN prosiguió sus contactos con los partidos políticos, las fuerzas sociales aglutinadas en el Comité Permanente del Debate Nacional (CPDN), y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), instalada el 26 de julio.

Los días 9 y 10 de agosto, el FMLN se reunió en México con una representación de los partidos políticos, con excepción de ARENA, para analizar la ratificación por parte de la asamblea legislativa de las reformas constitucionales, acordadas en México el 27 de abril, y que la anterior asamblea aprobó el 29 y 30 de abril. La dirigencia de ARENA rehusó acudir al encuentro en protesta por el secuestro del cafetalero y directivo del sector agropecuario del partido, Gregorio Zelaya, a quien el FMLN plagió en Usulután a mediados de julio. Los partidos que sí acudieron, además de discutir

el asunto de las reformas constitucionales, aprovecharon la ocasión para manifestar al FMLN su condena por el secuestro de Zelaya y, en general, su repudio contra cualquier práctica de índole similar.

El 11 de agosto, también en México, el FMLN se reunió con una delegación de ONUSAL para concertar las garantías para el desplazamiento de los observadores de la misión por las zonas bajo control guerrillero. El comandante Salvador Guerra, quien estuvo presente en la reunión, declaró posteriormente a la prensa que el FMLN tendría enlaces con todas las oficinas regionales que instalará ONUSAL "para cooperar en todo lo que podamos". El 14 de agosto, siempre en la capital mexicana, tuvo lugar un encuentro entre el FMLN y una delegación del CPDN, para discutir el estado actual del proceso de negociación y sus posibilidades. El 19 de agosto, otra vez en México, el FMLN volvió a reunirse con ONUSAL, para continuar tratando los aspectos operativos del trabajo de la misión en los territorios de persistencia guerrillera.

Paralelamente, los partidos políticos representados en la asamblea legislativa iniciaron, a finales de julio, las discusiones para la ratificación de las reformas constitucionales. Un mes más tarde, el 26 de agosto, la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea emitió dictamen favorable para los primeros seis artículos, en materia de derechos humanos, del decreto sobre reformas constitucionales aprobado por la asamblea anterior.

El 22 de agosto, el Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, coincidió con el comandante Shafick Handal en San José, Costa Rica, en un foro sobre el caso salvadoreño, organizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Al evento asistió también Alvaro de Soto, quien reiteró que el proceso de negociación "marcha por buen camino y es irreversible", aunque a la vez advirtió que el cese de fuego "aún no está a la vuelta de la esquina".

Sobre este transcurso, el 27 de agosto, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, por medio de su representante personal en las

negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el FMLN, Alvaro de Soto, invitó al presidente Cristiani y a la comandancia general del FMLN a reunirse en Nueva York entre el 16 y 17 de septiembre, para reanudar el proceso de negociación. El 29 de agosto, el FMLN emitió un breve comunicado en que aceptaba la invitación "atendiendo lo planteado en la misma carta [del secretario general] de que es necesario abordar el problema medular relativo al futuro de las fuerzas militares de ambas partes, que impide que se concluya la primera fase de la negociación". Por su parte, el mismo día, el gobierno salvadoreño emitió también un comunicado expresando su "complacencia por la decisión tomada por el señor Secretario General de involucrarse directamente en el proceso y de asumir el esfuerzo, que estamos seguros contribuirá a culminar el proceso en forma exitosa, para alcanzar la paz firme y duradera que desea y demanda urgentemente el pueblo salvadoreño". Según el comunicado gubernamental, el propósito de la reunión en Nueva York sería "hacer avanzar dicho proceso hacia acuerdos definitivos y especialmente sobre la reincorporación del FMLN a la vida civil, institucional del país a través de la implementación de garantías y condiciones que faciliten dicha transición".

Un mes antes, el 1 de agosto, el secretario de Estado norteamericano, James Baker, y el entonces todavía canciller soviético, Alexander Bessmertnykh, habían enviado a Pérez de Cuéllar una carta conjunta, en la cual lo instaban a una mediación más activa en el conflicto salvadoreño. El 17 de agosto, mediante sendas cartas de respuesta a Baker y Bessmertnykh, Pérez de Cuéllar les solicitó, a su vez, su cooperación para ayudar a "cortar el nudo gordiano" que enfrentaba el proceso de negociación en El Salvador. En las misivas, el secretario general de la ONU manifestaba su disposición a "involucrarse directa y personalmente de nuevo" en el proceso salvadoreño, pero advertía que aún había "temas fundamentales que se deben abordar para superar los logros hasta ahora alcanzados y específicamente lograr un cese al fuego".

Militarmente, el bimestre julio-agosto fue escenario de una intensa actividad bélica, lo cual

profundizó la escalada de la confrontación armada, generada a partir del segundo trimestre del año. A ello contribuyeron varios factores. El principal fue la decisión del presidente Bush, anunciada a finales de junio, de liberar 21 millones de dólares, de los 42.5 millones retenidos de la ayuda militar al ejército salvadoreño.

Un segundo factor, aparejado al anterior, lo constituyó la ostensible subida de tono de la retórica guerrillista de la Fuerza Armada, como lo puso en evidencia el discurso que el Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, pronunció el 5 de julio, con ocasión de los actos del 124 aniversario de fundación de la Policía Nacional, reafirmando la capacidad de la Fuerza Armada para derrotar militarmente al FMLN. "Las operaciones del FMLN —aseguró Ponce— son actos vandálicos contra blancos indefensos, no movimientos militares de importancia, por lo que carece de fundamento la pretensión de los subversivos de haber alcanzado un empate militar con el ejército". Claramente, las declaraciones del ministro replicaban tácitamente al comandante Joaquín Villalobos, quien había afirmado pocos días antes que "en El Salvador está claro que existe un empate militar y que el conflicto no puede resolverse por esa vía. Lamentablemente, hay todavía coroneles del ejército que creen poder ganar la guerra y eso provoca enfrentamientos y tensiones".

Un tercer factor, más puntual, que contribuyó a las tensiones, fue la emboscada que un comando de la Quinta Brigada de Infantería tendió la noche del sábado 29 de junio, en el cantón San José Río Frío (San Vicente), a una unidad guerrillera, comandada por el comandante Pedro Antonio Mira, de pseudónimo "Camilo Turcios". Según lo denunció el FMLN en un comunicado difundido el 5 de julio, en la emboscada, dirigida por un capitán de apellidos Castellón Velázquez, fueron muertos en el acto cuatro combatientes guerrilleros, pero el comandante Camilo Turcios, "gravemente herido", logró salir del sitio de la celada, siendo "perseguido y alcanzado a unos 600 metros del lugar, y asesinado con ráfagas de fusilería". Otros nueve combatientes, que también resultaron heridos, corrieron igual suerte. Por ello, el FMLN anunció una "respuesta militar a este aleroso cri-

men", aduciendo que con ese tipo de hechos la Fuerza Armada "está dando validez plena a las operaciones irregulares realizadas contra sus mandos en sus propias zonas de retaguardia".

En relación al mismo incidente, habitantes del sector en que ocurrieron los hechos denunciaron que entre los muertos figuraban siete campesinos a quienes el comandante Turcios había reclutado pocas horas antes de la emboscada, en el caserío Guadalupe, del cantón José Almendros, de Apastepeque. En efecto, en la exhumación de los cuerpos, practicada por el juez primero de paz de San Vicente, el 3 de julio, se comprobó que siete de los cadáveres eran de los campesinos reclutados por el FMLN.

Ya desde los primeros días del mes, los permanentes operativos de rastreo y desalojo, desplegados por la Fuerza Armada en zonas de persistencia guerrillera, suscitaron fuertes choques de encuentro en los alrededores de San José Guayabal (Cuscatlán) y en varios cantones, ubicados en el costado oriental del cerro de Guazapa, donde el batallón Bracamonte tenía concentrado el grueso de sus efectivos.

En la zona metropolitana de San Salvador, por su parte, los comandos Modesto Ramírez continuaron desarrollando una considerable movilización ofensiva. El 2 de julio, una radiopatrulla de la Policía Nacional fue atacada cuando circulaba por la colonia Miramonte, resultando un agente muerto y otros cuatro heridos. El mismo día, el edificio donde se encuentran las oficinas del registro territorial de la Fuerza Armada y de CONARA, ambas dependencias del Ministerio de Defensa, fue objeto de un atentado con granadas fragmentarias.

El 9 de julio, a primeras horas del día, fuerzas conjuntas del frente sur y de los comandos urbanos del FMLN establecieron varios retenes sobre la carretera Panamericana, a escasos kilómetros de la salida de Santa Tecla hacia Santa Ana, atravesando camiones y autobuses del transporte interdepartamental. Fuerzas combinadas del batallón Atlacatl, del Regimiento de Caballería y del Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL) entablaron combates con los insurgentes por espa-

cio de aproximadamente cinco horas. Un oficial murió y tres soldados resultaron heridos. El FMLN anunció que a partir de ese día iniciaría acciones similares en todas las carreteras de acceso a San Salvador. Por la noche, unidades rebeldes hostigaron simultáneamente posiciones defensivas de la Fuerza Aérea, en Ilopango; de la Policía de Hacienda, en Soyapango; la comandancia de la defensa civil de Santo Tomás y un puesto de la Primera Brigada de Infantería que custodiaba el Ingenio El Angel.

Con tales acciones, el FMLN dio inicio a una nueva campaña militar, denominada "Si quieren las armas, que ganen la guerra". Según el FMLN, el propósito de la campaña era "demostrar a los sectores que aún creen que pueden derrotar a las fuerzas guerrilleras, que no es ése el camino". En la inauguración de la campaña, el FMLN efectuó también un fugaz ataque contra las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública, localizadas en la finca El Espino, en la periferia occidental de San Salvador, mediante el lanzamiento de una carga explosiva de manufactura casera ("tepezcuinle"), desde un vehículo estacionado a unos doscientos metros del costado este de la academia militar. Aunque la carga explosiva no impactó en las instalaciones castrenses, ocasionó la muerte a un efectivo y heridas a otros dos al explotar en las proximidades de un puesto de seguridad, custodiado por alumnos de CETIPOL. Mientras, en el departamento de Chalatenango, columnas rebeldes incursionaron temporalmente en las poblaciones de La Palma, La Reina, San Ignacio, San Francisco Morazán, Agua Caliente y Nueva Concepción. Durante los combates suscitados en este último lugar, murieron once soldados y siete guerrilleros, mientras que seis agentes de la Policía Nacional y tres efectivos de la Segunda Brigada de Infantería resultaron heridos.

El 12 de julio, el FMLN efectuó otras acciones ofensivas de envergadura en la periferia de San Vicente y en las inmediaciones de Apopa, sobre la carretera troncal del norte. Los combates en San Vicente resultaron particularmente intensos y se prolongaron por unas seis horas. Las fuerzas rebeldes intentaron incursionar en la cabecera departamental y chocaron con el cordón de seguridad

establecido por la Quinta Brigada en el costado suroriental de la ciudad. Según los informes del COPREFA, diez soldados y tres rebeldes perecieron y otros doce soldados resultaron heridos. El FMLN, por su parte, aseguró haber causado 51 bajas (24 muertos y 27 heridos) a la Fuerza Armada en dichas acciones; también reconoció la muerte del comandante "Vladimir" y de otros dos combatientes guerrilleros.

Mientras, la presión constante ejercida por el ejército sobre las zonas de control guerrillero derivó en nuevos combates de encuentro en San Ignacio (Chalatenango), Suchitoto y San José Guayabal (Cuscatlán) y en los alrededores de Jucuarán, Mercedes Umaña, El Triunfo, San Francisco Javier y San Agustín (Usulután). La Fuerza Armada publicitó ampliamente el presunto éxito de sus operativos de rastreo y desalojo en Cuscatlán, donde habría desmantelado al menos tres campamentos rebeldes, en el marco de operativos conjuntos de la Primera Brigada de Infantería, el batallón Bracamonte y el Destacamento Militar Nº 5. El más importante de los campamentos desmantelados fue el denominado "El Quemado", ubicado en el cerro Los Lirios de la jurisdicción de San José Guayabal. Según la inteligencia militar, dicho campamento era el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y la base de operaciones del frente central "Modesto Ramírez". En la acción, el ejército decomisó 34 fusiles *M-16*, 13 fusiles *AK-47*, 6 fusiles *G-3*, 2 fusiles de alta precisión *Dragonov*, una ametralladora, 5 lanzagranadas *M-16*, 3 fusil-ametralladoras *RPG-K*, un lanzacohetes *LOW*, un lanzacohetes *RPG-7*, 258 cargadores, 13,974 cartuchos, 144 granadas para mortero y 68 pares de botas.

Entre el 15 y el 17 de julio, como se ha señalado más arriba, la comandancia general del FMLN decretó un cese de hostilidades en el área urbana de San Salvador y una disminución de su accionar ofensivo en el interior del país, para favorecer la realización de la cumbre de presidentes centroamericanos.

Una vez pasada la cumbre, el FMLN relanzó su accionar ofensivo. Las principales acciones ofensivas rebeldes durante la segunda quincena de julio se desarrollaron en el centro y norte del país.

El 19 de julio, el FMLN ocupó la población de Dulce Nombre de María, en Chalatenango. En los combates murieron ocho rebeldes y un efectivo de la Cuarta Brigada de Infantería; diez soldados más fueron dados como desaparecidos y otros siete sufrieron lesiones de diversa consideración. Simultáneamente, las unidades del FMLN ocuparon las poblaciones de Tejutla, San Rafael y San Ignacio, en el mismo departamento. Según el FMLN, el ejército sufrió 35 bajas en las acciones.

En cambio, los principales combates de encuentro ocurrieron en el centro y el oriente del país, en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, San Miguel y Usulután. En ese contexto, 7 guerrilleros murieron y otros 18 resultaron heridos durante combates registrados en las inmediaciones de Santa Elena (Usulután). En el cantón San Pedro Arenales, de Jucuapa, el FMLN sufrió tres muertos y cinco heridos durante un enfrentamiento con efectivos de la Sexta Brigada de Infantería. En San Vicente, murieron 15 rebeldes y 2 efectivos de la Quinta Brigada de Infantería al combatir en las proximidades de Tecoluca. Otros ocho combatientes rebeldes y dos soldados de la Tercera Brigada de Infantería perecieron durante fuertes combates en el área de San Jorge (San Miguel). El 22 de julio, unidades guerrilleras destruyeron la base de la Guardia Nacional en San Nicolás Lempa (San Vicente). En la acción murieron ocho efectivos, resultaron heridos tres soldados y tres más fueron dados como desaparecidos.

Paralelamente al lanzamiento de dichas acciones, el FMLN realizó su acción ofensiva más destacada del mes, cuando unidades del frente central "Modesto Ramírez" incursionaron en la población de Guazapa —ubicada a sólo 24 kilómetros al norte de San Salvador— donde atacaron la casa cuartel de la Guardia Nacional y la comandancia de la defensa civil. Las fuerzas guerrilleras, asimismo, tomaron el control de un importante trecho de la carretera Troncal del Norte, paralizando el tránsito vehicular en la zona. Efectivos de la Primera Brigada de Infantería repelieron a las unidades rebeldes tras cruentos combates que se prolongaron por espacio de ocho horas. Según los informes oficiales, en las acciones murió un

soldado y tres más resultaron heridos. Entre la población civil, pereció una niña de seis años por heridas ocasionadas por la explosión de una granada de lanzacohete *RPG-7*, que impactó su casa de habitación; otros cinco civiles resultaron heridos. Al día siguiente, las fuerzas del FMLN tomaron nuevamente el control de otro tramo de la Troncal del Norte, a la altura del cantón San Jerónimo, sobre el kilómetro 28, paralizando por segundo día consecutivo el tránsito vehicular. En esta oportunidad, los combates dejaron un saldo de un soldado muerto y otros ocho heridos.

En la madrugada del 29 de julio, columnas insurgentes atacaron las instalaciones de la subestación de CEL en la población de Ateos (La Libertad), custodiadas por efectivos de la Policía de Hacienda. En la acción murió un efectivo y un transformador de energía sufrió daños severos.

En San Salvador, los comandos urbanos efectuaron varios hostigamientos contra patrullas móviles y puestos de vigilancia del ejército. El 24 de julio, un soldado murió durante un ataque guerrillero en Mejicanos. El 27, el FMLN hostigó con fuego de lanzacohetes y bombas caseras la comandancia de la defensa civil de la colonia Costa Rica, dañando parcialmente las instalaciones e hiriendo a cinco paramilitares. El 31, en acciones simultáneas, los comandos urbanos atacaron a patrullas móviles de la Primera Brigada de Infantería y de la Policía Nacional en la colonia Vairo, el barrio San Miguelito y sobre el boulevard Venezuela. En esta última acción resultaron heridos dos civiles.

El 24 de julio, un comando rebelde tendió una emboscada al capitán Néstor Ariel Lam Romero sobre la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de Olocuilta (La Paz). El capitán Lam, vestido de civil, se dirigía en su automóvil a las instalaciones del Destacamento Militar de Ingenieros (DMIFA) en Zacatecoluca, donde se encontraba destacado. Al menos 39 impactos de fusil *AK-47* hicieron blanco en su vehículo. Según indicó el FMLN al reivindicarse la autoría de la acción, el capitán Lam era fundador del batallón Atlacatl y fue "ajusticiado" en razón de su participación en la masacre de El Mozote (Morazán), en diciembre de 1981.

En total, al ofrecer su balance mensual de julio, el COPREFA registró 57 combates de encuentro y 41 ataques del FMLN, los cuales dejaron un saldo de 214 bajas (86 muertos y 128 heridos) en las filas de la Fuerza Armada y 275 (148 muertos y 127 heridos) en las del FMLN.

En agosto, la actividad militar experimentó un ligero desescalamiento, debido en buena medida a una relativa disminución de la actividad ofensiva del FMLN; la Fuerza Armada, en cambio, mantuvo inalterables sus operativos de presión en las zonas conflictivas del país, sobre todo en los tradicionales frentes de guerra en los departamentos de Chalatenango y Morazán. Con todo, pese a que el accionar ofensivo del FMLN disminuyó en términos de choques de encuentro, se multiplicó en otros aspectos.

En el transcurso de agosto, el COPREFA registró 75 combates de encuentro y 37 ataques del FMLN. En términos de desgaste de sus fuerzas vivas, la Fuerza Armada sufrió 181 bajas (63 muertos y 118 heridos) y el FMLN, 254 (129 muertos y 125 heridos). Por su lado, en su balance mensual, *radio Venceremos* aseguró que las fuerzas del FMLN ocasionaron 641 bajas al ejército, entre ellas 6 oficiales, así como 24 soldados prisioneros. Asimismo, la emisora informó que, en las diversas actividades bélicas, el FMLN decomisó al ejército 52 fusiles, 1 mortero *M-60*, un cañón de 90 mm, 5 ametralladoras y 2 lanzacohetes *LOW*.

La acción ofensiva más relevante del FMLN durante la primera quincena del mes ocurrió la noche del 8 de agosto, cuando unidades rebeldes atacaron las instalaciones de la presa hidroeléctrica "El Guajoyo", ubicada en el departamento de Santa Ana, a la altura del kilómetro 99 de la carretera que conduce a Metapán. La acción no ocasionó bajas en ninguna de las partes, pero sí pérdidas materiales de cierta consideración, pues el fuego de fusilería y artillería liviana dañó algunos transformadores eléctricos.

Los choques de encuentro más fuertes, en la primera semana de agosto, tuvieron lugar en Usulután. El día 3, en el más cruento de ellos, 31 rebeldes y 16 efectivos murieron al combatir en el cantón San Antonio, de la jurisdicción de Nueva

Granada. Otros diez soldados resultaron heridos en las mismas acciones.

En la zona urbana de San Salvador, los comandos urbanos continuaron haciendo gala de su movilidad, al realizar constantes hostigamientos contra puestos de defensa y patrullas del ejército y de los cuerpos de seguridad. Las principales acciones de asalto fueron dirigidas contra efectivos de la Policía de Hacienda que prestaban seguridad a las oficinas de CAESS ubicadas sobre la 18 avenida sur; contra agentes de la Guardia Nacional, en las proximidades del cine Terraza; y contra otro puesto de la Guardia ubicado en la colonia Guatemala. Asimismo, los comandos urbanos lanzaron cinco cargas de dinamita al estacionamiento del Banco Central de Reserva.

Durante la segunda semana de agosto, los principales choques de encuentro ocurrieron en el norte y oriente del país, en los departamentos de Chalatenango y San Miguel. En este último, doce insurgentes y cinco efectivos del batallón Atonal murieron y otros trece insurgentes y dos soldados más resultaron heridos durante recios combates desarrollados en las proximidades de San Jorge. En Chalatenango, un oficial y tres soldados del batallón Bracamonte, además de siete rebeldes, murieron, mientras que otros cinco efectivos y quince rebeldes más resultaron heridos en el curso de fuertes enfrentamientos en las inmediaciones de San José Las Flores y de San Isidro Labrador.

También en el centro y norte del país, en los departamentos de La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango, el FMLN impulsó acciones ofensivas de consideración. En ese marco, columnas insurgentes emboscaron a patrullas militares sobre la carretera troncal del norte, en las proximidades de Apopa; sobre la carretera al puerto de La Libertad, en las inmediaciones de Zaragoza; y sobre la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Pedro Perulapán. Asimismo, el FMLN efectuó diversos ataques contra puestos fijos de defensa de la Fuerza Armada en la periferia de Chalatenango, en San José Guayabal (Cuscatlán), en El Paisnal (San Salvador) y en la periferia de San Francisco Gotera (Morazán).

En San Salvador, los comandos urbanos emprendieron una nueva modalidad de sabotaje contra la empresa privada, encaminando su accionar ofensivo contra las compañías constructoras. El 12 de agosto, dos viviendas nuevas, todavía sin habitar (casas-modelo), resultaron destruidas y otras seis sufrieron severos daños luego de que comandos urbanos detonaran cargas dinamiteras en un área en construcción en la colonia Metrópolis norte. Simultáneamente, otras dos viviendas, una ubicada en la colonia Jardines de Merliot y la otra en la residencial Alfredo Espino —sobre la 25 Avenida Sur y calle a Monserrat— fueron destruidas durante atentados similares. El 14 de agosto, los comandos urbanos efectuaron un nuevo atentado dinamitero en la urbanización “Villas de Miramonte II”. Los comandos justificaron su nueva modalidad de sabotaje como una medida de protesta contra los recientes desalojos efectuados por la Fuerza Armada en comunidades marginales y contra el alto costo de la vivienda en el país.

El 14 de agosto, una unidad guerrillera urbana atacó con fuego de fusilería un retén de la Guardia Nacional en las cercanías de la residencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro. En la acción resultó herido un agente de dicho cuerpo de seguridad.

Mientras, en el interior del país, la Fuerza Armada continuó impulsando sus operativos de rastreo y desalojo en diversas áreas conflictivas de Chalatenango, Cabañas, Usulután y Morazán. En este último departamento, el ejército incursionó hasta Perquín, controlando de forma temporal dicha localidad. En Chalatenango, la *radio Farabundo Martí* denunció que, a partir del 24 de agosto, el ejército inició una nueva operación contrainsurgente, en el marco de la cual se suscitaron fuertes combates en los caseríos El Carrizal, Flor Amatillo, El Roblarcito y Cerro Grande, en la jurisdicción de Agua Caliente.

En el ámbito urbano, el ejército propinó un par de buenos reveses a las fuerzas del FMLN. El 21 de agosto, la Policía de Hacienda incautó un importante arsenal de armas en un negocio de llantas ubicado en la calle Francisco Menéndez y boulevard Venezuela, en el barrio Santa Anita. Según los informes castrenses, en el interior de una cis-

terna se encontraron cuatro toneladas de pertrechos bélicos, entre ellos 6 misiles tierra-aire (3 *SAM-14*, 1 *SAM-7*, y 2 *Red eye*), 40 fusiles de asalto *AK-47*, 2 fusiles soviéticos de alta precisión *Dragonov*, 1 ametralladora *KDK*, más de 700 mil cartuchos de diverso calibre, 20 lanzagranadas *RPG-18*, 2 lanzagranadas *RPG-7*, 250 granadas 81 mm para *RPG-7*, 580 bloques de TNT, 60 granadas de mano, 15 radios de intercomunicación y 50 pistolas de diverso calibre. Todo este armamento fue valuado por peritos castrenses en aproximadamente diez millones de colones. Al día siguiente, un segundo arsenal —menor que el anterior— fue descubierto en Santa Tecla (La Libertad), en otra casa de seguridad que también operaba bajo la cobertura de un negocio de venta y reparación de llantas (*Servicar*). Al menos ocho personas fueron detenidas en relación al armamento incautado en ambos lugares.

El 22 de agosto, un comandante de las FARN y miembro del recientemente constituido comité político del FMLN, de nombre Eugenio Chicas Martínez, quien utilizaba el pseudónimo de “Marco Jiménez”, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional, junto con otras tres personas, en las inmediaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuando presuntamente realizaban actividades encomendadas por la dirección política guerrillera.

En la última semana de agosto, los combates de encuentro más intensos se desarrollaron en los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Morazán. En el norte de este último departamento, donde el batallón Arce desplegaba un operativo, se suscitaron diversos enfrentamientos en la montaña El Moscarón, en los alrededores del caserío Santa Catarina, en el cerro Chapelcoro y en el cantón Roble Negro, todos estos lugares ubicados en la jurisdicción de San Fernando. En Cabañas, el teatro de las operaciones bélicas abarcó el área general de Cinquera, mientras que en Chalatenango los enfrentamientos se concentraron en el área de San José Las Flores.

El ejército efectuó nuevos decomisos de armas en diversos puntos del interior del país. Los principales ocurrieron en el caserío El Inglés, en San Sebastián (San Vicente); en el cantón El Salitre,

en San José Guayabal (Cuscatlán) y en el caserío Los Ramírez y la localidad de La Quebradona, en Joatique (Morazán).

Por su parte, el FMLN intensificó su actividad ofensiva en el perímetro urbano de San Salvador. Los comandos urbanos impulsaron diversas acciones de asalto contra patrullas móviles y puestos de defensa del ejército en varios puntos de la capital, entre ellos: en los alrededores del monumento a La Constitución, en la colonia Miramonte; en un puesto de defensa ubicado en la casa comunal de la colonia Miralvalle; en la avenida El Boquerón de la colonia Jardines del Volcán; en el pasaje Morazán, al costado norte del Palacio Nacional; en la colonia Buena Vista de Ayutuxtepeque; contra posiciones de la Primera Brigada de Infantería en los alrededores del centro penal de Mariona y contra posiciones de CETIPOL en la colonia Jardines de la Hacienda, en Ciudad Merliot.

Como culminación de su accionar ofensivo del mes, el FMLN hizo un llamado a todas sus unidades para intensificar su accionar de sabotaje como una medida de protesta contra la política económica del gobierno. En este marco, en la madrugada del 27 de agosto, unidades zapadoras del FMLN dinamitaron estructuras sostenedoras de cuatro líneas primarias de 115 mil voltios, correspondientes a los trayectos de Santa Ana-Guajoyo, Opico-Nejapa, Central Hidroeléctrica "15 de septiembre"-San Miguel y Nuevo Cuscatlán-Sonsonate.

En consonancia con el recrudecimiento de la actividad militar, también el ámbito de los derechos humanos sufrió un sensible deterioro. El caso más relevante fue el asesinato del vigilante del Consejo de Comunidades Marginales (CCM), Martín Ayala Ramírez, perpetrado en la sede de esta organización, en la madrugada del 8 de julio. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, efectuada a partir del testimonio de su compañera de vida, Leticia Campos, quien sobrevivió milagrosamente al percance, elementos armados ingresaron al local del CCM, donde ataron de pies y manos a Martín Ayala, lo amarraron a un poste y lo torturaron con gala de salvajismo, para después degollarlo con arma blanca. Mientras, su compañera de vida fue brutalmente herida en los brazos

y cabeza, en un fallido intento por degollarla. Asimismo, los sujetos registraron las oficinas y robaron algún dinero de la organización.

Algunos días después, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos capturó y acusó como responsables del asesinato a José Luis Anaya y Gilberto Contreras, quienes fueron consignados al Juzgado Segundo de Paz, el 5 de agosto. Asimismo, la Comisión acusó como autora intelectual del hecho a Martha Abigail Contreras, a quien presentó como ex empleada del CCM, y quien fue capturada varios días después.

La dirigencia del CCM rechazó categóricamente la versión gubernamental, en una conferencia de prensa ofrecida el 7 de agosto. En ella, el directivo Mario Chávez aseguró que los dos detenidos eran "chivos expiatorios" que el gobierno había presentado "para limpiarse", al tiempo que negó que la presunta tercera implicada, Martha Abigail Contreras, hubiese trabajado alguna vez en el CCM "ni como secretaria ni como promotora". Por su parte, la viuda de Martín Ayala, rechazó "las declaraciones falsas que el gobierno saca por la televisión". "Cuento —puntualizó— que yo soy testigo porque yo lo sufrí, lo viví, esos momentos de angustia. Y yo confirmo que son policías nacionales los que a mí me atacaron, luego sacaron también a mi compañero". A su vez, el arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera Damas, compartió el escepticismo del CCM sobre la versión oficial, recordando las maniobras de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos para entorpecer las pesquisas en el caso de la masacre de la UCA.

También el contexto particular en que ocurrió el asesinato de Martín Ayala hacía poco creíble la versión del gobierno. Apenas una semana antes, un grupo de unas 50 familias, provenientes de varios asentamientos marginales, respaldadas por el CCM, habían ocupado un predio abandonado desde 1986, ubicado en la residencial San Luis, en San Salvador. Al día siguiente, las familias fueron cercadas por un grupo de agentes de la Policía Nacional, quienes formularon diversas amenazas en su contra. Al lugar también se presentó un individuo que se identificó como gerente de acción social de la alcaldía de San Salvador, quien ame-

nazó a los ocupantes del terreno y advirtió que "la Fuerza Armada más tarde se ocuparía del caso". En el mismo contexto, el alcalde capitalino, Armando Calderón Sol, señaló que las tomas de tierras del CCM eran "un reto total y absoluto del orden jurídico", y advirtió que la Fuerza Armada y el gobierno actuarían con energía para detener esas acciones, realizadas por "grupos de extrema izquierda que son manipulados por el FMLN".

En la noche del 30 de junio, un grupo de antimotines de la Policía Nacional atacó a los ocupantes del predio, golpeándolos brutalmente hasta obligarlos a abandonar el lugar. Según denuncias de CORDECOM, "irrumplieron más de 300 antimotines apoyados por la Primera Brigada de Infantería, que procedieron a desalojar a nuestros compañeros salvajemente; como bestias sin conciencia y corazón les dieron garrotazos, puntapiés, culatazos a niños y mujeres embarazadas y ancianos, quedando completamente golpeados... un oficial cobardemente les decía: de los barrancos han venido, a los barrancos los vamos a aventar". En el violento desalojo abortó una de las mujeres que habían realizado la toma. El asesinato de Martín Ayala ocurrió poco después, de acuerdo al *modus operandi* de los escuadrones de la muerte. Por otra parte, significativamente, ese mismo fin de semana, sujetos desconocidos catearon también el local de las hermanas de la "Pequeña Comunidad", contiguo al seminario de San José de la Montaña. Ambos incidentes ocurrieron en el marco de nuevas amenazas del Frente Anticomunista Salvadoreño (FAS) contra el movimiento popular. Por todo eso, el movimiento popular no consideró creíble la versión del gobierno sobre el asesinato de Martín Ayala.

En ese contexto, el 26 de julio, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) quedó por fin instalada oficialmente, justo un año después de que fuera firmado el acuerdo de San José sobre derechos humanos entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. En las semanas subsiguientes, ONUSAL empezó a abrir sus oficinas regionales en Chalatenango, San Vicente, San Miguel y Santa Ana.

La instalación de ONUSAL, empero, no pareció arredrar a la Fuerza Armada, como lo pusieron

en evidencia poco después los hechos violentos ocurridos los días 17, 18 y 19 de agosto en la ciudad "Segundo Montes", en el departamento de Morazán. Durante esos días, efectivos de los batallones Arce, Morazán, Atlacatl y Belloso desarrollaron operativos en las cercanías y al interior de dicha comunidad.

Según denuncias de los repobladores, elementos de los referidos batallones penetraron a la localidad a las 9:30 de la noche del día 17 de agosto, lanzando granadas y morteros y ametrallando los asentamientos Los Hatos y San Luis. En esa primera incursión, una anciana de la comunidad resultó gravemente herida por esquirlas de granada, cuando cuatro artefactos de este tipo lanzados por la tropa explotaron en el patio de su humilde casa. Las explosiones provocaron también la pérdida de 500 gallinas de la granja de la comunidad, en el asentamiento Los Hatos. Al día siguiente, 18 de agosto, varios centenares de soldados de los mismos batallones se acercaron al asentamiento de San Luis, ocupando la calle principal y tomando además posiciones en los cerros cercanos. Pobladores locales se acercaron a los soldados para protestar por los trágicos eventos del día anterior. Los militares les lanzaron bombas lagrimógenas y dispararon numerosas ráfagas sobre las cabezas y cerca de los pies de un grupo de alrededor de 500 miembros de la comunidad, a quienes acompañaban algunos observadores internacionales. A las 10:30 de la mañana, unos 2 mil repatriados se agruparon en el centro cultural de la comunidad, manteniendo su protesta y exigiendo el retiro de los soldados del lugar. A las 11:30 de la mañana, varios soldados empezaron a disparar hacia los pies de otro grupo de la comunidad, concentrado bajo unos árboles de sombra en el asentamiento de Los Hatos. Al mediodía, la tropa produjo un simulacro de enfrentamiento en el mismo asentamiento; los soldados dispararon al aire por más de media hora.

Como saldo de todos esos incidentes, resultaron heridas por balas o esquirlas, con distintos grados de gravedad, nueve personas, incluyendo a una mujer embarazada, quien abortó al recibir el impacto de una bala en la espalda, la cual le atravesó el pecho. Otras cinco personas resultaron

golpeadas por el tumulto provocado por las explosiones y balaceras, y veinte más sufrieron golpes leves en las mismas circunstancias, mientras que 23 resultaron intoxicadas por las bombas lagrimógenas. Asimismo, siete casas fueron ametralladas, y la comunidad perdió unas 500 gallinas.

De todos estos hechos fueron testigos presenciales centenares de personas, incluyendo a tres oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pese a ello, la Fuerza Armada tuvo aún la audacia de presentar una visión *toto caelo* distinta. El coronel Oscar León Linares, comandante del Destacamento Militar Nº 4, justificó el operativo por motivo de presencia guerrillera en la comunidad, lo cual suscitó un choque armado contra efectivos del batallón Atlacatl (coincidentemente, el coronel León Linares fue el responsable del batallón Atlacatl cuando los comandos de esta unidad perpetraron la masacre de la UCA, en noviembre de 1989. Anteriormente, León Linares estuvo implicado también en la masacre de Las Hojas). En cuanto a la utilización de los gases lagrimógenos, la versión castrense sostuvo que "únicamente se los utilizó para calmar a un grupo de personas fuera de control después de que soldados fueron blanco de tiros desde lugares del interior de la comunidad".

Peor aún, según fuentes diplomáticas fidedignas, el jefe del Estado Mayor, general Gilberto Rubio, incluso habría sostenido que uno de los oficiales de ACNUR presentes en la comunidad habría hecho señales con los brazos para pedir a los efectivos gubernamentales que se retiraran e inmediatamente después habría hecho otras señales al FMLN para que sus combatientes dispararan contra la tropa. Después de los sucesos, el coronel León Linares adoptó una serie de medidas de represalia contra la comunidad. En una carta entregada a los directivos de ésta, prohibió nuevamente el paso de todo personal extranjero hacia la localidad, a excepción del autorizado por el ejército. También fue restringido el acceso del personal de la organización "Médicos sin fronteras", a pesar de las grandes necesidades que la comunidad tenía de sus servicios después de los estragos del operativo castrense. La propia movili-

dad del personal de "Médicos sin fronteras" fue limitada a su base de Jocoaitique durante varios días. Además, el ejército impidió el paso de material de construcción, energético y alimentos para la comunidad.

Los incidentes en la ciudad "Segundo Montes" fueron los hechos más relevantes de represión contra las comunidades de repatriados, pero no fueron un caso aislado. En el norte de Chalatenango, el 20 de agosto, el batallón Atlacatl cateó la comunidad de repatriados de Nueva Trinidad. En Cuscatlán, Cabañas y Usulután, el ejército desarrolló operativos militares en las inmediaciones de otras comunidades de repatriados.

Un tercer eje de acontecimientos en el ámbito de los derechos humanos fue el caso de la UCA, el cual recobró especial actualidad con ocasión de la visita que el congresista Joe Moakley efectuó al país a principios de julio. Durante su estadía, Moakley se entrevistó con varios sectores involucrados en el caso, entre ellos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, con los abogados defensores de los asesinos, e incluso con el teniente José Ricardo Espinoza Guerra y con el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, responsables del operativo de la masacre, quienes le aseguraron que "no sabían nada" y que estaban detenidos "injustamente". En su entrevista con ambos oficiales, reclusos en la Policía de Hacienda, Moakley fue acompañado por miembros del Estado Mayor.

No obstante, el evento más relevante de su visita fue su presentación en la "Cátedra de realidad nacional", organizada por la UCA, el 1 de julio, sobre "El caso de los jesuitas y la política norteamericana". En dicha presentación, Moakley reafirmó enérgicamente la responsabilidad institucional de la Fuerza Armada salvadoreña en la masacre y en su posterior encubrimiento. Las reacciones del ejército y del gobierno no se hicieron esperar. Al día siguiente, el Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, demandó del congresista pruebas de sus acusaciones, y rechazó que la Fuerza Armada hubiese obstaculizado el proceso, como —en su opinión— lo probaba el solo hecho de que hubiesen declarado judicialmente más de 200 miembros de la institución.

Una semana después, la Fuerza Armada como institución difundió un comunicado en el cual rechazaba las apreciaciones de Moakley.

Con todo, las réplicas más virulentas provinieron del alcalde Calderón Sol, quien, en declaraciones vertidas el 4 de julio, calificó la visita de Moakley "como una interferencia, como un abuso" y censuró sus críticas contra el ejército como carentes de "valor ni sentido". "Yo creo —añadió Calderón Sol— que El Salvador merece más respeto. El Salvador debe pelear y resguardar su dignidad como nación y como pueblo, y no puede venir ningún congresista a hacer cuestionamiento institucional" (*El Mundo*, 4 de julio de 1991). El 10 de julio, en una nueva conferencia de prensa, el Calderón Sol arremetió otra vez contra Moakley, esta vez a propósito de una misiva dirigida por el CPDN al congresista para que monitoreara también el caso del asesinato de Martín Ayala. "Es lamentable —puntualizó el alcalde— que los salvadoreños provoquemos la interferencia de políticos norteamericanos, extranjeros, en nuestros asuntos, para que vengan a menospreciar nuestras instituciones. Nosotros respetamos al ejército norteamericano, en donde hay muchos casos de delincuentes que han pasado por él, y que son delincuentes" (*La Prensa Gráfica*, 12 de julio de 1991, p. 47). Una vez más, condenó la "injerencia grotesca" de gente como Moakley, a quien aconsejó "que legisle en su país y no en el nuestro" y exigió "no inmiscuirse en los asuntos internos de El Salvador ni acusar a la Fuerza Armada sin tener pruebas". "Como salvadoreño y como nacionalista —remató— tengo la suficiente autoridad moral, valor y coraje para decirle a cualquier senador norteamericano que no venga a atropellar a los salvadoreños" (*El Diario de Hoy*, 11 de julio de 1991, p. 3).

Sobre el mismo tema, el presidente Cristiani, más comedido que el alcalde capitalino, comentó el 3 de julio que compartía la opinión del general Ponce en el sentido de que "no fue un crimen institucional, sino ejecutado por miembros de la Fuerza Armada que actuaron solos". "Si los militares [involucrados] hubieran recibido una orden del Alto Mando, entonces sería institucional, pero hasta el momento sería aventurado decir que así

fue". Asimismo, Cristiani señaló que, aunque no podía descartarse la posibilidad de que hubiese más involucrados, todo lo investigado "no ha dado ni una prueba que implique a más personas".

En el plano propiamente judicial del caso, la nota más destacable en el bimestre fueron las comisiones rogatorias que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió al Juzgado Cuarto de lo Penal, con las declaraciones de diez norteamericanos a quienes el Juez Ricardo Zamora había solicitado interrogar, en calidad de testigos, a propuesta de la acusación particular. Dichos testigos fueron los siguientes: el mayor Eric Buckland y su hermana Carol Buckland; su jefe inmediato, teniente coronel William Hunter; su compañero de casa, capitán Carlos Puentes; el ex jefe del grupo militar de Estados Unidos en El Salvador, coronel Milton Menjívar; los asesores del C-2 (inteligencia) al momento de la masacre, el coronel Lanning Porter y el mayor Douglas Lewis; el mayor Steve Donehoo; y los ex funcionarios de la embajada en San Salvador, Richard Chidester (jefe de la oficina legal, quien trabajó muy cerca de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos) y Janice Elmore (funcionaria de la sección política y enlace informal con los militares). El gobierno norteamericano, empero, rechazó la solicitud de la Compañía de Jesús para que representantes suyos presenciaran las declaraciones.

A finales de agosto, los acusadores particulares procedieron a presentar una acción civil contra el Estado salvadoreño, demandando de éste una indemnización de 70 mil dólares por los destrozos causados en la UCA y otra de 230 mil dólares para resarcir en lo posible el daño material causado a José Edgardo Ramos Lozano, hijo de Julia Elba y hermano de Celina, asesinadas junto con los jesuitas en la madrugada fatídica. Asimismo, demandaron una indemnización simbólica de un colón por cada uno de los sacerdotes masacrados.

En el ámbito laboral, el bimestre se inició con la aparente resolución del problema de las tomas de tierras que había llevado a peligrosos enfrentamientos entre el gobierno y las organizaciones campesinas en las semanas anteriores. Con tal propósito, el 3 de julio, los ministros de Agri-

cultura, Antonio Cabrales, y de Defensa, René Emilio Ponce, se reunieron con la dirigencia de la Asociación Democrática Campesina (ADC). Luego de la reunión, el Ministro Cabrales informó que el gobierno y el ejército habían acordado no desalojar a los campesinos que hubieran ocupado tierras de diversas haciendas particulares en distintos puntos del país hasta no iniciar una negociación con los propietarios de las mismas. Por su parte, el dirigente campesino Ismael Merlos afirmó que la ADC se comprometió a detener las tomas "por lo menos mientras dure el período de negociaciones". El general Ponce indicó que la Fuerza Armada respetaría el acuerdo entre el gobierno y la ADC, pero advirtió que si algún grupo individual realizaba nuevas tomas "actuaremos conforme a la ley". Cabrales añadió que en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios de las tierras, el gobierno reubicaría a los campesinos en otros terrenos y buscaría la forma de que les fuese retribuido lo sembrado en los lotes ocupados.

El espacio cedido por la problemática de las tierras pasó a ser ocupado por las protestas contra una nueva alza del 30 por ciento de las tarifas eléctricas para el servicio doméstico (e incrementos progresivos para los sectores comercial e industrial), y contra la política de privatización impulsada por el gobierno.

El 5 de julio, la Confederación General de Trabajadores (CGT) presentó un recurso de amparo contra el alza de las tarifas, fundamentado en los artículos 131 y 231 de la Constitución. El día 9, la Asociación de Trabajadores de CEL (AT-CEL) efectuó una marcha de protesta contra los incrementos tarifarios, contra la privatización y contra la militarización de la CEL. El 10 de julio, delegados de la UNTS, UNOC y AGEPYM —así como de organizaciones empresariales— concurren a la asamblea legislativa para exponer sus respectivas posiciones frente a los incrementos.

En el ámbito de la privatización, el 27 de junio, la asamblea derogó la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC), con los votos de las fracciones de ARENA y del PCN. En sustitución del ISIC, el 3 de julio, el Viceministro del Interior, Jorge Martínez Me-

léndez, hizo entrega de la personería jurídica a la Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (PRO-CAFE). El 10 de julio, el Viceministro de Agricultura informó que esa cartera estudiaba la privatización de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y su posible traspaso bajo la administración de FEPADE. También anunció el cierre inminente del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), el cual se hizo efectivo a partir del 1 de agosto.

Ante tal situación, diversas gremiales laborales, sobre todo del sector público, respondieron primero con varias marchas y concentraciones de protesta, y luego llamaron a un paro general de labores en el sector público para el 19 de agosto. El solo llamado al paro provocó la aparición del presidente Cristiani en cadena nacional, acusando a quienes habían preparado la movilización de ser "miembros de organizaciones que han venido realizando acciones dirigidas a manipular a trabajadores de la administración pública, para llevar a cabo actos contra la Constitución, las leyes y sobre todo contra el pueblo salvadoreño", en el marco de una maniobra estratégica del FMLN. De paso, el mandatario recordó a los trabajadores que el artículo 221 de la Constitución prohibía tales acciones.

De acuerdo a las gremiales organizadoras, el paro fue efectivo en unas veinte instituciones estatales y en un centenar de alcaldías del país. Entre las entidades que participaron en la protesta se contaron los ministerios de Hacienda, de Obras Públicas, de Educación, de Salud y de Agricultura, así como la Lotería Nacional, ANTEL, AN-DA, una parte del ISSS, INPEP, FSV, ISTU, CEPA-Acajutla, Correos Nacionales, CEL y la Universidad de El Salvador. En total, según los organizadores, habrían participado unos 60 o 65 mil trabajadores estatales. La movilización recibió también el apoyo solidario de los diputados de la Convergencia Democrática, del PDC y de la UDN, quienes no asistieron a la asamblea legislativa ese día.

Las demandas fundamentales de la movilización fueron, además de la protesta por la privatización y, o cierre de instituciones estatales, la exigencia de 500 colones de aumento salarial para

todos los empleados públicos y la solución a las demandas particulares de cada organización laboral estatal.

Sobre este transfondo de creciente efervescen-

cia interna, el presidente Cristiani partió el 28 de agosto hacia América del Sur, para una gira oficial de una semana por Chile, Argentina y Uruguay.

